

Señor

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI

E. S. D.

| | |
|----------------------------|---|
| Medio de control | Reparación Directa |
| Demandante | Jaime García de la Cruz y otros |
| Demandado | Distrito Especial de Santiago de Cali |
| Llamada en garantía | Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. (coaseguro) |
| Radicación | 76001-33-33-001-2024-00275-00 |

FANNY TRUJILLO RODRIGUEZ, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.280.445 expedida en Cali, abogada titulada, con Tarjeta Profesional número 63.738 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de la Sociedad **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, dentro de los términos legales, de manera respetuosa, mediante el presente documento procedo a contestar la demanda que dio origen al proceso de la referencia y el llamamiento en garantía formulado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, todo de acuerdo a lo siguiente:

Aseguradora Solidaria de Colombia O.C., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. Chubb Seguros S.A. y AIG Colombia Seguros Generales S.A. como Compañía de Seguros y como entidades coaseguradoras del Distrito Especial de Santiago de Cali, no tienen la obligación asumir el pago de los perjuicios que pretenden los demandantes, pues estos **no** aportaron pruebas conducentes y pertinentes que demuestren los elementos que configuran la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali por los hechos en los que fue víctima el señor Jaime García de la Cruz, pues los mismos fueron hechos provocados por terceros donde la administración no tuvo participación por acción y/u omisión.

SUMARIO: I. Contestación a la demanda II. Contestación al llamamiento en garantía III. Solicitud de pruebas. IV. Notificaciones. V. Traslado de los alegatos a las demás partes.

L CONTESTACION DE LA DEMANDA

Pronunciamiento respecto a los hechos:

FRENTE AL HECHO “PRIMERO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “SEGUNDO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “TERCERO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “CUARTO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “QUINTO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

Es importante resaltar que las manifestaciones del apoderado de la parte demandante carecen de sustento probatorio suficiente respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, limitándose a una narración unilateral sin respaldo documental o testimonial que permita su acreditación en sede judicial.

Adicionalmente, de la propia descripción de los hechos se desprende que la agresión fue presuntamente perpetrada por terceros completamente ajenos a la administración pública, sin que exista evidencia alguna que permita atribuir al Distrito de Santiago de Cali responsabilidad por acción u omisión en el desarrollo de los mismos.

Por tanto, se solicita al despacho valorar con rigor la insuficiencia probatoria de los hechos alegados, y tener en cuenta que no existe vínculo jurídico ni fáctico que comprometa la responsabilidad de mi representada en los eventos descritos.

FRENTE AL HECHO “SEXTO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “SEPTIMO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “OCTAVO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “NOVENO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DECIMO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DECIMO PRIMERO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DECIMO SEGUNDO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DECIMO TERCERO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DECIMO CUARTO”: No me consta, toda vez que es un hecho

ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

FRENTE AL HECHO “DECIMO QUINTO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

Respecto a las afirmaciones relativas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, estas constituyen una manifestación subjetiva de la apoderada de la parte demandante, carente de respaldo probatorio suficiente. En consecuencia, no deben ser valoradas como prueba, toda vez que forman parte del objeto del litigio y, por tanto, deberán ser acreditadas mediante los medios probatorios legalmente establecidos.

FRENTE AL HECHO “DECIMO SEXTO”: No es un hecho, es una apreciación subjetiva relativas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, estas constituyen una manifestación subjetiva de la apoderada de la parte demandante, carente de respaldo probatorio suficiente. En consecuencia, no deben ser valoradas como prueba, toda vez que forman parte del objeto del litigio y, por tanto, deberán ser acreditadas mediante los medios probatorios legalmente establecidos.

FRENTE AL HECHO “DECIMO SEPTIMO”: No me consta, toda vez que es un hecho ajeno a mi representada y en el cual no tiene injerencia. En consecuencia, el demandante, en virtud de la carga probatoria a la que está obligado de conformidad con la ley, deberá demostrar de manera conducente y pertinente dicha afirmación.

Pronunciamiento respecto a las pretensiones:

Me opongo a cada una de las pretensiones de la demanda, y respetuosamente solicito al señor Juez se absuelva a mi representada, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA y al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda carece de fundamentos fácticos y jurídicos que prosperen. Lo anterior, conforme no logra demostrade la configuración de los elementos de la responsabilidad estatal bajo ningún título de imputación, a saber:

Me pronunciaré frente a cada pretensión en los siguientes términos:

FRENTE A LA PRETENSIÓN “PRIMERO”: Nos oponemos a la declaración de responsabilidad solicitada por los demandantes, en tanto no se configuran los

elementos estructurales de la responsabilidad estatal conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En efecto:

- **Daño antijurídico:** Si bien se alegan lesiones físicas y mentales sufridas por el señor Jaime García de la Cruz, estas derivan de una agresión perpetrada por terceros ajenos a la administración, lo cual constituye una causa extraña que rompe el nexo de imputación.
- **Falla del servicio por omisión:** No se acredita que el Municipio haya incurrido en omisión funcional, orgánica o anónima. La ausencia de vigilancia privada en el Ecoparque Pisamos no puede considerarse per se como una falla del servicio, máxime cuando la zona cuenta con presencia policial mediante cuadrantes, y no existe norma específica que imponga la obligación de vigilancia privada en todos los ecoparques.
- **Nexo causal:** El daño alegado no se deriva de una conducta atribuible al Municipio, sino de un hecho imprevisible e irresistible causado por terceros, lo que configura una causal exonerativa de responsabilidad conforme al artículo 64 del Código Civil y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En este sentido compartimos y respaldamos la oposición formulada por el Municipio en su contestación de demanda, en la que se niega la existencia de culpa, dolo, negligencia o impericia por parte de sus funcionarios o dependencias. La agresión sufrida por el demandante fue un hecho externo, ajeno a la actividad administrativa, y no puede ser jurídicamente imputado al ente territorial.

Adicionalmente, como aseguradora del Distrito Especial de Santiago de Cali, reiteramos que la póliza suscrita no cubre eventos derivados de hechos de terceros que constituyen fuerza mayor o caso fortuito, ni aquellos que no sean imputables jurídicamente al asegurado. En consecuencia, no procede el reconocimiento de cobertura ni la activación de la garantía en este caso.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEGUNDO”: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación. Me pronuncio en los siguientes términos:

2.1. PERJUICIOS MORALES: En cuanto al perjuicio moral, mencionado en el apartado de las pretensiones, es importante recordar que los perjuicios no pueden ser indemnizados basándose en presunciones. Debe haber certeza absoluta tanto en la

calidad en la que se piden como en la causación del daño; de lo contrario, no será posible obtener una sentencia condenatoria o una declaración de responsabilidad, ya que esta no puede basarse en presunciones sin elementos probatorios que permitan concluir su certeza.

En este sentido, los perjuicios morales están tasados de indebida manera, los perjuicios morales están calculados al arbitrio de la parte demandante sin sustento alguno, desconociendo de paso la jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia.

Me opongo a la prosperidad de los daños morales, toda vez que, de conformidad con el artículo 167 del Código General, aplicable por remisión del artículo 211 de la ley 1437 de 2011, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” la parte demandante no acredita la congoja y la aflicción producidas. Aunque la pretensión no está dirigida de manera directa a mi representada, quien fue llamado en garantía al proceso, no se aportan pruebas suficientes que permitan establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Al no poder endilgarse responsabilidad a los demandados, menos podrá ser responsable mi representado, dentro de este proceso, toda vez, no existe sustento jurídico ni factico para proceder con todo lo solicitado.

2.2. DAÑO A LA SALUD: En la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 28.804, ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz, en la cual se unifica sobre el contenido del perjuicio “daño a la salud”, además de su dinámica en las lesiones temporales, se plantea que esta tipología es reconocida única y exclusivamente a la víctima directa. Sobre la acepción de “víctima directa” debe entenderse el sujeto “sufriente por un suceso traumático accidental o por el daño”, mientras que los indirectos son “aquellos que están cerca de ella, constituido por los familiares, que tienen que afrontar el dolor de sus seres queridos y readaptarse a la nueva situación.”

Respecto del alcance y contenido del perjuicio fisiológico o a la vida de relación, el H. Consejo de Estado ha hecho las siguientes precisiones:

- A partir de la sentencia proferida el 6 de mayo de 1993, el Consejo de Estado ha reconocido la existencia de una forma de perjuicio extrapatrimonial, distinto del moral, denominado- en éste y en otros fallos posteriores- perjuicio fisiológico o a la vida de relación y se definió como "pérdida de la posibilidad de realizar... otras actividades vitales, que aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia".

- El 25 de septiembre de 1997, se precisó, con más claridad, el alcance del concepto mencionado. Se resalta que la expresión "perjuicio fisiológico" es más adecuado el concepto de perjuicio de placer. No obstante, es claro que no se renuncia finalmente la utilización de aquélla. Por lo demás, El Consejo de Estado ha seguido usando la expresión, asimilándola a la de daño a la vida de relación.

No todas las actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles, tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades rutinarias, que ya no pueden realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo. no se trata simplemente de la afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos otros actos de su vida, aun los de carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas del mundo. En efecto, se trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior.

En este caso no ha quedado plenamente demostrado que se haya causado este daño y mucho menos la cuantificación del mismo.

2.3. PERJUICIOS PATROMONIALES: En relación con las pretensiones indemnizatorias por concepto de lucro cesante, tanto consolidado como futuro, esta parte se permite formular oposición fundada en la insuficiencia probatoria, la ausencia de nexo causal y el carácter especulativo de los montos reclamados.

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO: Respecto al lucro cesante consolidado, no obra en el expediente prueba idónea que permita establecer con certeza el ingreso real y constante que percibía la víctima antes del hecho. Las afirmaciones contenidas en la demanda sobre su actividad económica resultan genéricas y no están respaldadas por documentos contables, certificaciones laborales, declaraciones tributarias ni ningún otro medio probatorio que permita verificar la existencia de una fuente de ingresos estable. En consecuencia, no puede hablarse de una pérdida cierta, sino de una mera expectativa que no satisface el estándar probatorio exigido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Adicionalmente, no se ha demostrado que el supuesto daño patrimonial tenga como causa directa y eficiente una conducta atribuible al Municipio de Santiago de Cali. La agresión sufrida por la víctima fue cometida por terceros ajenos a la administración, lo que rompe el nexo causal necesario para estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado. En ausencia de dicho nexo, cualquier condena por lucro cesante carecería de fundamento jurídico.

LUCRO CESANTE FUTURO: En cuanto al lucro cesante futuro, la pretensión resulta

aún más débil, pues se basa en proyecciones hipotéticas que no cuentan con soporte técnico ni probatorio. No se allegó estudio actuarial, análisis económico ni evidencia que permita establecer con un mínimo de certeza la expectativa de ingresos futuros. Tampoco se acreditó la edad probable de retiro, la estabilidad laboral ni la posibilidad real de continuar generando ingresos en el tiempo. En este sentido, la pretensión se construye sobre escenarios especulativos que no pueden ser objeto de reparación en sede judicial.

Finalmente, debe advertirse que los montos reclamados por concepto de lucro cesante futuro resultan desproporcionados y no se ajustan a criterios de equidad ni proporcionalidad. La reparación integral no puede convertirse en una fuente de enriquecimiento injustificado, y menos aún cuando no se ha demostrado la existencia de un daño cierto, cuantificable y atribuible a la entidad demandada.

Por todo lo anterior, esta parte solicita que se nieguen las pretensiones relacionadas con el lucro cesante, tanto consolidado como futuro, por no cumplir con los requisitos legales y jurisprudenciales para su reconocimiento.

FRENTA A LA PRETENSIÓN “TERCERO”: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación. Me pronuncio en los siguientes términos:

FRENTA A LA PRETENSIÓN “CUARTO”: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, por cuanto no se demuestra por la parte demandante los elementos de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio ni otro título de imputación.

Fundamentos de derecho

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.”

Este precepto constitucional consagra el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, el cual exige la concurrencia de dos elementos esenciales para que proceda la indemnización:

- Existencia de un daño antijurídico, entendido como aquel que la víctima no está en la obligación jurídica de soportar, que lesione un bien jurídicamente protegido y que sea cierto, concreto y evaluable.

- Imputación del daño al Estado, que debe analizarse en dos niveles: uno fáctico, que determina si el daño se originó en una acción u omisión atribuible a la administración; y otro jurídico, que establece si existe deber de reparación conforme al ordenamiento.

En el caso concreto, esta parte considera que no se configuran los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado.

En primer lugar, no se ha acreditado de manera suficiente la existencia de un daño cierto en materia de ingresos dejados de percibir. Las afirmaciones contenidas en la demanda sobre la actividad económica de la víctima carecen de respaldo documental, como certificaciones laborales, declaraciones de renta, extractos bancarios o cualquier otro medio probatorio que permita establecer con certeza el monto, periodicidad y estabilidad de los ingresos presuntamente perdidos. En consecuencia, no puede hablarse de un daño cierto, sino de una expectativa subjetiva que no satisface el estándar probatorio exigido por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En segundo lugar, no se ha demostrado que el supuesto daño patrimonial tenga como causa directa y eficiente una conducta atribuible a la administración. La jurisprudencia ha sido clara en señalar que el nexo causal entre el hecho y el daño debe ser claro, directo y no interrumpido por factores externos. En este caso, el accidente que dio lugar a la reclamación se produjo por circunstancias ajenas al actuar de la entidad pública, lo que excluye la posibilidad de imputación fáctica y jurídica.

Adicionalmente, en lo que respecta al lucro cesante futuro, la pretensión resulta aún más débil, pues se fundamenta en proyecciones hipotéticas sin sustento técnico. No se allegó estudio actuarial ni análisis económico que permita establecer con un mínimo de certeza la expectativa de ingresos futuros. Tampoco se acreditó la edad probable de retiro, la estabilidad laboral ni la posibilidad real de continuar generando ingresos en el tiempo. En este sentido, la pretensión se construye sobre escenarios especulativos que no pueden ser objeto de reparación en sede judicial.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que el reconocimiento del lucro cesante exige prueba rigurosa del ingreso dejado de percibir, así como de la relación causal entre el daño y la conducta estatal. En la sentencia del 8 de febrero de 2017 (Rad. 08001233100019980066301, Exp. 38432), se precisó que la demostración del daño no puede basarse en simples afirmaciones, sino que debe estar respaldada por elementos objetivos, verificables y suficientes.

Frente al daño moral, si bien se admite que este puede inferirse en ciertos casos por la sola ocurrencia del hecho dañoso, la jurisprudencia ha sido clara en exigir que dicha inferencia esté respaldada por elementos objetivos que permitan establecer la intensidad del sufrimiento, la cercanía con la víctima y la afectación concreta de los demandantes. En la demanda se solicita una suma idéntica de cien salarios mínimos

legales mensuales vigentes para cada uno de los familiares del señor García de la Cruz, sin que se haya acreditado de manera individualizada el grado de afectación emocional, ni se haya aportado prueba testimonial, psicológica o documental que permita valorar el dolor padecido por cada uno de ellos.

La sola relación de parentesco, aunque relevante, no basta por sí sola para presumir automáticamente el daño moral, especialmente cuando se reclama una indemnización elevada y uniforme para seis personas, sin distinción de circunstancias personales, vínculos afectivos ni contexto familiar. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que la reparación del daño moral debe ser razonable, proporcional y ajustada a la prueba obrante en el expediente, evitando indemnizaciones mecánicas que desconozcan la individualidad del sufrimiento.

En segundo lugar, respecto al daño a la salud, esta parte considera que la pretensión carece de soporte técnico suficiente. No se allegó dictamen psicológico, psiquiátrico ni sociológico que permita establecer cómo dicha afectación ha repercutido en la vida de relación, en la autonomía funcional o en el bienestar emocional del señor García de la Cruz. La demanda se limita a afirmar que el afectado “no puede bailar ni compartir con sus hijos”, sin aportar elementos objetivos que permitan valorar la intensidad, duración y consecuencias del daño a la salud como categoría autónoma del perjuicio extrapatrimonial.

La jurisprudencia ha sido clara en señalar que el daño a la salud no puede confundirse con el daño fisiológico ni con el daño patrimonial, y que su indemnización exige prueba concreta sobre la alteración significativa de la calidad de vida del afectado. En este caso, la solicitud de una suma fija de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin justificación técnica ni proporcionalidad frente al tipo de afectación sufrida, resulta desproporcionada y contraria al principio de reparación justa.

Adicionalmente, debe advertirse que el nexo causal entre el daño y la conducta estatal no se encuentra plenamente acreditado. La agresión sufrida por el señor García de la Cruz fue cometida por terceros ajenos a la administración, en un contexto de violencia urbana que, si bien es preocupante, no puede ser atribuida directamente a una omisión específica del Municipio. No se demostró que la ausencia de vigilancia en el ecoparque Pisamos haya sido la causa directa y eficiente del daño, ni que el Municipio hubiera desconocido una posición de garante en condiciones específicas que hicieran previsible el ataque.

Finalmente, debe tenerse presente que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado no opera como un seguro automático frente a cualquier daño, sino que exige la verificación rigurosa de los elementos estructurales del artículo 90 constitucional. En ausencia de prueba del daño cierto, del nexo causal y de la imputación jurídica, no hay lugar a declarar responsabilidad alguna.

Por lo anterior, esta parte solicita que se nieguen las pretensiones indemnizatorias por concepto de lucro cesante, tanto consolidado como futuro, por no cumplir con los requisitos legales y jurisprudenciales para su reconocimiento.

Excepciones de mérito.

- **Falta de legitimidad en la Causa por pasiva**

Si bien es cierto, la parte demandante no aporta pruebas conducentes y pertinentes respecto a las circunstancias de modo y lugar de los hechos y tampoco respecto a imputación fáctica, si eventualmente el despacho judicial considera que hay daño antijurídico, deberá tener presente que no hay legitimidad en la causa por pasiva del Distrito Especial de Santiago de Cali, teniendo en cuenta lo siguiente:

De conformidad con lo manifestado por el Consejo de Estado en sentencia con fecha 17 de julio de 2015, la legitimación en la causa es una figura de derecho procesal que se refiere a la capacidad de las partes, de acuerdo con la ley, de formular o controvertir las pretensiones de una demanda... La legitimación en la causa puede ser activa, cuando se refiere a la capacidad que tiene una persona para demandar; o pasiva cuando tiene que ver con la capacidad para comparecer como demandado.

De lo anterior se colige que la legitimación en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. Por lo cual, no es dable condenar a una entidad sin existir elementos de juicio suficientes para ello, pues no se acredita la existencia de una relación jurídica- sustancial.

Por todo lo anterior, solicito a su señoría declarar probada la presente excepción.

- **Inexistencia de Responsabilidad: ausencia de los elementos que configuran la Responsabilidad del Estado**

El juicio de responsabilidad extracontractual del Estado tradicionalmente se ha estructurado mediante el estudio del daño, la imputación y el fundamento. No obstante, en postura reciente de la jurisprudencia contenciosa administrativa establece que el juicio de responsabilidad del Estado debe analizarse dos elementos, a saber:

- **Daño antijurídico:** Entendido como aquel daño que la víctima no está en deber

jurídico de soportar; lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; y que sea cierto.

- La imputación: Que requiere abordar dos niveles, uno fáctico (atribución material, a través de la cual se determina el origen de un resultado que se adjudica a una acción u omisión) y otro jurídico (fundamento de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico)

Del análisis integral de los hechos expuestos en la demanda, esta parte considera que no se configura responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto no se acredita una falla en el servicio atribuible al Municipio de Santiago de Cali ni se demuestra el nexo causal entre la conducta de la administración y el daño alegado por los demandantes.

En primer lugar, debe señalarse que el hecho generador del daño —la agresión sufrida por el señor Jaime García de la Cruz el día 8 de octubre de 2022— fue ejecutado por particulares ajenos a la administración, en circunstancias que escapan al control directo del ente territorial. El ataque se produjo en horas de la mañana, mientras el señor García realizaba labores de mantenimiento en el Ecoparque Pisamos, y fue motivado por una disputa espontánea con residentes del sector, quienes reaccionaron de manera violenta ante una negativa del trabajador. No se trató de un evento previsible, reiterado ni vinculado a una situación de riesgo estructural atribuible a la entidad pública.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que el Estado no responde por todos los riesgos sociales ni por la totalidad de los hechos violentos que ocurren en su territorio, sino únicamente por aquellos que se derivan de una omisión concreta en el cumplimiento de sus deberes legales, en especial cuando ostenta una posición de garante. En este caso, no se acreditó que el Municipio hubiera asumido una obligación específica de protección individual respecto del señor García, ni que existiera una advertencia previa, una amenaza directa o una situación de riesgo inminente que hiciera exigible una medida de seguridad particular.

Si bien la demanda afirma que el Ecoparque Pisamos se encuentra ubicado en una “zona roja” de la ciudad, ello no basta para estructurar una falla del servicio. La sola ubicación geográfica no convierte al Municipio en responsable automático de todos los hechos violentos que allí ocurran. Para que se configure la responsabilidad estatal por omisión, debe demostrarse que la administración conocía de manera cierta y específica el riesgo, que tenía la capacidad de prevenirlo, y que omitió adoptar las medidas razonables para evitar su concreción. Ninguno de estos elementos se encuentra acreditado en el expediente.

Por el contrario, los hechos narrados evidencian que el señor García se encontraba realizando labores propias de su contrato de prestación de servicios, en un espacio público abierto, sin que existiera una situación de alteración del orden público ni una amenaza identificable. La agresión fue súbita, inesperada y ejecutada por terceros que no tenían vínculo alguno con la administración. No se ha demostrado que el Municipio hubiera recibido denuncias previas, que existiera una solicitud formal de vigilancia en ese punto, ni que se hubiera desconocido una orden judicial o administrativa que impusiera medidas de protección.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el contrato suscrito entre el señor García y el DAGMA no contemplaba la prestación de servicios en condiciones de riesgo ni establecía cláusulas de seguridad especial. El contratista aceptó voluntariamente las condiciones del servicio, incluyendo la realización de actividades en diferentes ecoparques, sin que se haya acreditado que el Ecoparque Pisamos presentara condiciones excepcionales que hicieran exigible una protección reforzada. La jurisprudencia ha reiterado que los contratistas del Estado no son sujetos de especial protección salvo que se encuentren en situación de vulnerabilidad específica, lo cual no se acreditó en este caso.

Finalmente, debe advertirse que la demanda se construye sobre una interpretación extensiva del deber de vigilancia, que no encuentra respaldo en el marco normativo vigente. Si bien el Municipio tiene la obligación general de velar por la seguridad en el espacio público, dicha obligación no se traduce en una responsabilidad objetiva frente a todos los hechos violentos que ocurran en sus parques. La jurisprudencia ha sido clara en señalar que la responsabilidad del Estado por omisión exige una falla concreta, probada y jurídicamente relevante, lo cual no se configura en este caso.

Por todo lo anterior, esta parte solicita que se declare la inexistencia de responsabilidad patrimonial del Estado, por cuanto no se acredita una falla en el servicio, ni se demuestra el nexo causal entre la conducta de la administración y el daño alegado por los demandantes.

- **Enriquecimiento sin justa causa**

El enriquecimiento sin causa se presenta en los casos en los que un patrimonio se ve incrementado a expensas de otro, sin que exista una causa jurídica para ello. En cuanto a los elementos materiales, podemos decir que son tres:

- i) enriquecimiento de un patrimonio,
- ii) empobrecimiento de otro y

iii) un origen común entre los dos.

Entonces, el enriquecimiento es un aumento en el patrimonio de una persona, lo cual debe ser a expensas del patrimonio de otro, para que se cumpla con los dos primeros elementos materiales. Por último, es necesario que exista un hecho común que permita identificar un punto de referencia entre el beneficio obtenido y el detrimento económico generado.

Los demandantes al pretender la indemnización de un presunto daño antijurídico se estarían enriqueciendo sin justa causa, pues no se aporta prueba conducente y pertinente de los daños que se pretenden indemnizar.

- **Indebida tasación de perjuicios**

Al respecto la corporación unificó en el 2014 sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de lesiones personales. En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo con actores como el porcentaje de incapacidad laboral que dejó la lesión y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. No obstante, lo anterior, deberá demostrarse el vínculo emocional con el fin de tasar los perjuicios.

Respecto del lucro cesante reclamado por la parte accionante, es necesario advertir que no se aportó prueba idónea del ejercicio de una actividad económica que generara ingresos reales y comprobables al momento del accidente, ni evidencia contable, laboral o documental que acredite que el señor YEPES percibía ingresos regulares derivados de un vínculo contractual, actividad independiente o relación laboral formal.

El lucro cesante, como ha señalado de forma reiterada el Consejo de Estado, exige que se acredite un daño cierto y actual, y no simplemente hipotético, fundado en presunciones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga de la prueba recae sobre quien alega el perjuicio, y en este caso no se acredita pérdida alguna de ingresos, ni se demuestra interrupción de la actividad productiva que justifique la compensación reclamada.

En consecuencia, no resulta procedente ordenar el pago de indemnización por lucro cesante (ni consolidado ni futuro), cuando:

- No se demostró que la víctima percibía ingresos al momento del accidente.
- No se probó que dejó de percibirlos.

- No existe evidencia de que esté imposibilitada para seguir generándolos.

Así las cosas, el lucro cesante reclamado carece de soporte probatorio suficiente y debe ser desestimado, conforme a lo establecido por la jurisprudencia nacional en materia de reparación integral, que exige prueba cierta del perjuicio y del nexo causal con el hecho dañoso, so pena de inadmitir indemnizaciones con fundamento meramente especulativo.

- **Culpa exclusiva de un tercero**

Esta parte propone como excepción de mérito la culpa exclusiva de un tercero, por considerar que el daño alegado por los demandantes no es imputable al Municipio de Santiago de Cali ni a la entidad aseguradora llamada en garantía, sino que fue causado por la conducta violenta, imprevisible y autónoma de particulares ajenos a la administración.

De conformidad con los hechos narrados en la demanda, el señor Jaime García de la Cruz fue agredido el día 8 de octubre de 2022 por varios individuos residentes en el sector aledaño al Ecoparque Pisamos, quienes actuaron de manera espontánea, violenta y sin provocación legítima, utilizando armas blancas y de fuego, y causando lesiones graves al trabajador. Esta agresión fue ejecutada por personas que no tenían vínculo alguno con el Municipio, que no actuaban bajo su dirección, ni en cumplimiento de funciones públicas, y cuya conducta no puede ser atribuida a una omisión específica de la administración.

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que cuando el daño es causado exclusivamente por un tercero, se rompe el nexo causal necesario para estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado. En efecto, el artículo 90 de la Constitución exige que el daño sea imputable a la acción u omisión de una autoridad pública, lo cual no ocurre cuando el hecho generador proviene de una conducta autónoma, dolosa o culposa de un tercero que actúa por fuera del control estatal.

En este caso, los agresores actuaron por iniciativa propia, en un contexto de altercado personal, sin que existiera una situación de riesgo previsible ni una amenaza identificable que hiciera exigible una medida de protección especial por parte del Municipio. La agresión fue súbita, violenta y ejecutada con armas, lo que configura una conducta penalmente reprochable, pero no imputable a la administración desde el punto de vista civil o administrativo.

Además, debe tenerse en cuenta que el señor García de la Cruz se encontraba realizando labores en un espacio público abierto, en compañía de otros contratistas que, por razones operativas, se encontraban en otros puntos del ecoparque. No se ha demostrado que el Municipio hubiera recibido denuncias previas sobre amenazas, ni que existiera una orden judicial o administrativa que impusiera medidas de

seguridad específicas en ese lugar. La ausencia de vigilancia privada, aunque lamentable, no constituye por sí sola una falla del servicio, y menos aún cuando el daño proviene de una conducta violenta e imprevisible de terceros.

La jurisprudencia ha reiterado que el Estado no responde por todos los riesgos sociales ni por la totalidad de los hechos violentos que ocurren en su territorio, sino únicamente por aquellos que se derivan de una omisión concreta en el cumplimiento de sus deberes legales. En este caso, no se acreditó que el Municipio hubiera desconocido una posición de garante, ni que la agresión fuera previsible, evitable o atribuible a una conducta negligente de la administración.

Por todo lo anterior, esta parte propone como excepción de mérito la culpa exclusiva de un tercero, y solicita que se declare la no responsabilidad del Estado por el daño alegado, en tanto no se configura el nexo causal ni la imputación jurídica exigida por el artículo 90 de la Constitución.

- **Innominada**

Esta excepción tiene su fundamento especial en el artículo 282 del Código General del proceso. Dice esta norma: “Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

No todo lo que constituye excepción que pueda beneficiar al demandado se puede visibilizar desde el comienzo del proceso, por cuanto que éste, apenas empezando, no es susceptible de pronunciamientos de fondo. Es necesario que el proceso avance y a medida que lo haga, se vayan notando las coincidencias o contradicciones en las expresiones de las partes que lo componen.

Lo que sí vale desde el comienzo, es la sinceridad, seriedad y seguridad con que cada una de las partes use para plasmar sus hechos. y sus puntos de vista en torno de esos hechos, que a la postre pueden identificar una excepción, concepto éste con el cual o bajo el cual generalmente se expone un medio de defensa por parte del demandado.

En el fondo, pues, lo que interesa es que, a falta de titularidad y precisión gramatical del término, lo que vale, es que el demandado exprese tales circunstancias de hecho con las que el juez pueda llegar al convencimiento de que lo que se impone no es una condena, sino la absolución del demandado o, como en este caso, la plena exclusión del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y de mi representada, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. por todas las razones aducidas en el presente escrito.

II. CONTESTACION AL LLAMAMIENTO EN GARANTIA A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A

Pronunciamiento respecto a los hechos.

Teniendo en cuenta que mi representada MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. fue llamada en garantía por el Distrito de Santiago de Cali, procedemos a intervenir, pronunciándonos respecto al llamamiento en garantía.

FRENTE AL HECHO “PRIMERO”: Es cierto. La existencia del proceso judicial y el radicado señalado ha sido debidamente notificada a esta aseguradora mediante auto admisorio del llamamiento.

FRENTE AL HECHO “SEGUNDO”: Es cierto. Esta es una transcripción objetiva de las pretensiones de la demanda y constituye el fundamento fáctico del llamamiento.

FRENTE AL HECHO “TERCERO”: Es cierto que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. participa como aseguradora en la póliza de responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226, con un 30% de participación en coaseguro y con deducible del 5% y que la vigencia del contrato abarca la fecha de ocurrencia del supuesto hecho dañoso.

Sin embargo, el simple hecho de participación en la póliza no implica automáticamente la obligación de indemnizar, ya que el reconocimiento de cobertura por parte de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A está condicionado a que:

- Se acredite de forma clara y suficiente la responsabilidad civil extracontractual imputable al asegurado.
- Se demuestre el nexo causal entre el daño y una acción u omisión atribuible al Distrito, y que dicha conducta esté dentro del marco del riesgo asegurado.
- El siniestro no se encuentre dentro de las exclusiones del condicionado general.
- Se respete el límite de cobertura y los deducibles establecidos en la póliza

Pronunciamiento en cuanto a las pretensiones.

Pese a que en el presente caso no son procedentes las pretensiones de los demandantes, por cuanto no se demostró ni acreditó los elementos de la responsabilidad del Estado, en el eventual caso que el señor Juez condene al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, me opongo a la prosperidad del llamamiento en garantía.

Si bien es cierto que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA hace parte del grupo de aseguradoras que integran la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1507222001226, expedida a favor del Distrito con vigencia entre el 30 de abril de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022, ello no implica por sí mismo la procedencia del llamamiento ni la obligación automática de indemnizar, por cuanto toda cobertura está sujeta al cumplimiento estricto de las condiciones, términos y límites pactados en el contrato de seguro.

La póliza opera bajo la modalidad de ocurrencia, lo que significa que solo serán amparados los hechos que se generen dentro de su vigencia, siempre que exista un hecho imputable al asegurado que cause un daño cierto, evaluable y jurídicamente atribuible dentro del régimen de responsabilidad civil extracontractual. En este caso, ni en la demanda principal ni en el llamamiento se ha acreditado —ni siquiera sumariamente— que los hechos estén amparados por la póliza, ni se ha demostrado que concurren los presupuestos para imputar responsabilidad directa al asegurado.

Además, el condicionado de la póliza establece expresamente que el asegurador no está obligado a indemnizar en ausencia de prueba clara del siniestro, del nexo causal y de la responsabilidad del asegurado. En ese sentido, el hecho de que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA participe en un 30% del coaseguro no implica, en ningún caso, solidaridad automática con el resto de las aseguradoras ni con el Distrito. La obligación de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA se encuentra limitada al porcentaje de participación pactado y bajo los topes y deducibles aplicables, sin que pueda entenderse como una garantía directa ni total frente a los perjuicios que se llegaren a declarar en contra del asegurado.

Tampoco se ha verificado si el supuesto evento dañoso se encuentra excluido de cobertura, o si existen causales de exoneración como el hecho exclusivo de la víctima, de un tercero o la inexistencia de culpa del asegurado. Ninguno de estos elementos ha sido desarrollado con el rigor probatorio necesario, por lo que la activación del amparo contractual es, en esta etapa procesal, jurídicamente improcedente.

En consecuencia, me opongo a la pretensión en tanto resulta prematuro y carente de

sustento jurídico imponer a esta aseguradora una obligación que no ha nacido ni ha sido jurídicamente reconocida, y que solo podrá ser exigible en la medida en que se demuestre plenamente que:

- El asegurado incurrió en responsabilidad civil extracontractual conforme a la ley.
- El hecho generador ocurrió dentro del giro ordinario de las actividades aseguradas.
- Se cumplieron todas las condiciones de asegurabilidad, límites, sublímites y deducibles.
- No se configuró ninguna causal de exclusión.

Por lo tanto, solicito al despacho no acceder a la pretensión de condena contra MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA, hasta tanto no se verifique debidamente el siniestro asegurado conforme a los términos del contrato.

Excepciones:

- **Sujeción a los términos, condiciones, amparos, límites y exclusiones de la póliza.**

La figura del llamamiento en garantía permite convocar en principio a una persona diferente a las partes inicialmente trabadas en la relación procesal (demandante y demandado), con fundamento en una relación sustancial (por ministerio de la ley) o por virtud de una relación contractual, existente entre el llamante y el llamado para que éste, responda de acuerdo con ese vínculo jurídico, de modo que el demandado llamante se libre de los eventuales efectos adversos que pueda acarrearle el litigio.

En este caso específico, es procedente el llamado que se hace a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. en virtud del contrato de seguro. No. 1507222001226, No obstante, en el proceso no se acreditó la materialización del riesgo asegurado.

Sin embargo, ante una eventual condena, el asegurador solo estará obligado a pagar conforme este establecido en la póliza, tal como lo establece el artículo 1079 del Código Comercio, que para mayor claridad, cito a continuación:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA

SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta

conurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.”

Por lo anterior, se deberá tener en cuenta que, en virtud del contrato de coaseguro, a mi representada le corresponderá asumir el 30.00% del riesgo, así como también deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- a. Objeto
- b. Exclusiones
- c. Deducibles
- d. Límites asegurados por eventos

Cláusulas que se encuentran en las condiciones particulares y generales del contrato de seguro.

Dicho porcentaje de coaseguros aplican en las pólizas No. 1507222001226.

- **Ausencia de solidaridad entre coaseguradoras**

El coaseguro se encuentra regulado en el artículo 1095 del Código de Comercio, se define entonces como aquel “en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”. Además, se indica que le es aplicable la normatividad referente al contrato de seguro.

Esta figura es definida así: “es la distribución horizontal o primaria de los riesgos. Mediante este sistema un conjunto de compañías, entre las cuales no median relaciones recíprocas de aseguramiento, asumen responsabilidades individuales con respecto a un mismo riesgo. Que haya o no haya entre ellas un acuerdo previo para asumir cada una, una cuota de responsabilidad total, es una circunstancia extraña a la naturaleza técnica del coaseguro, la distribución puede derivarse de la iniciativa del asegurado, que quiere hacer partícipes del mismo seguro a dos o más compañías, o tener origen en una de estas que, incapaz de asumir la responsabilidad total, y con la aquiescencia del interesado, propone a otras instituciones aseguradoras la repartición del riesgo” (Ossa G, 1988).

Las responsabilidades de los coaseguradores respecto del asegurado o beneficiario, para expresarlo en términos acordes con la más estricta juridicidad, son de carácter conjunto y no solidario, es decir, cada uno responde hasta concurrencia de su respectiva participación en el riesgo y la falencia o incapacidad que pueda afectar a

alguno de ellos no acrece las responsabilidades de los demás participantes.

- **Inexistencia de responsabilidad solidaria entre el demandado DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA**

Como quiera que la razón para vincular a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, es la existencia del contrato de seguro suscrito entre esta con el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, como coaseguradora de Mapfre Seguros Generales de Colombia, teniendo en cuenta que la compañía no participo ni intervino en los hechos que fundamentan la acción, no siendo posible que haya obligación solidaria, entendida esta como aquella con pluralidad de sujetos, que consiste en que existiendo varios deudores o acreedores de una prestación que, pudiendo ser divisible , se puede exigir a cada uno de los deudores o acreedores por el total de ella, de manera que el efectuado o recibido de uno de ellos, extingue toda la obligación respecto al resto.

Respecto a estas obligaciones el código civil colombiano establece:

ARTÍCULO 1568. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.

- **Innominada**

Esta excepción tiene su fundamento especial en el artículo 282 del Código General del proceso. Dice esta norma: “Resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.

No todo lo que constituye excepción que pueda beneficiar al demandado se puede

visibilizar desde el comienzo del proceso, por cuanto que éste, apenas empezando, no es susceptible de pronunciamientos de fondo. Es necesario que el proceso avance y a medida que lo haga, se vayan notando las coincidencias o contradicciones en las expresiones de las partes que lo componen.

Lo que sí vale desde el comienzo, es la sinceridad, seriedad y seguridad con que cada una de las partes use para plasmar sus hechos. y sus puntos de vista en torno de esos hechos, que a la postre pueden identificar una excepción, concepto éste con el cual o bajo el cual generalmente se expone un medio de defensa por parte del demandado.

En el fondo, pues, lo que interesa es que, a falta de titularidad y precisión gramatical del término, lo que vale, es que el demandado exprese tales circunstancias de hecho con las que el juez pueda llegar al convencimiento de que lo que se impone no es una condena, sino la absolución del demandado o, como en este caso, la plena exclusión del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI por todas las razones aducidas en el presente escrito.

III. SOLICITUD DE PRUEBAS

Documentales:

- i. Pruebas aportadas por la partes demandadas y llamadas en garantía en sus contestaciones.
- ii. Sírvase tener como prueba la Póliza de Seguro y sus condiciones generales.

Interrogatorio de parte:

- i. Sírvase de decretar el interrogatorio a la parte demandante sobre los hechos que dan origen a la demanda.

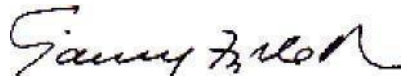
IV. NOTIFICACIONES

La suscrita apoderada judicial puede ser notificada en la CR 1 OESTE 1 A-30 APTO 801 en la ciudad de Cali. Correo electrónico: trujillo445@emcali.net.co y trujillorodriguezconsultores1@gmail.com. Teléfono: 3108434961.

V. TRASLADO DE LOS ALEGATOS A LAS DEMAS PARTES

En atención a lo dispuesto en la Ley 2213 de 2022, se remite el presente escrito en copia a las demás partes en el proceso.

De la Señora Juez, con todo respeto,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fanny Trujillo Rodriguez', with a stylized, cursive script.

FANNY TRUJILLO RODRIGUEZ

Cédula de ciudadanía No. 31.280.445 de Cali

Tarjeta Profesional No. 63.738 del Consejo Superior de la Judicatura.